

1358

PARTE 1

Nº 1358

16 de Noviembre de 2018

**PRESUPUESTO
2019**

**BOLETÍN
12130-05**

VOLUMEN I

RESEÑA LEGISLATIVA es una publicación de
LIBERTAD Y DESARROLLO
DIRECTOR RESPONSABLE: Luis Larraín A.
EDITOR: Pablo Kangiser G.
DIRECCIÓN: Alcántara 498, Las Condes, Santiago,
Chile.

RESEÑA LEGISLATIVA

Nº 1358

16 DE NOVIEMBRE DE 2018

ÍNDICE

PRESUPUESTO 2019

BOLETÍN 12130-05

VOLUMEN I

OPINIÓN EJECUTIVA	4
ANTECEDENTES GENERALES DE LA LEY DE PRESUPUESTOS	5
COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL	7
ALGUNOS ASPECTOS ESPECÍFICOS	14

VOLUMEN II

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY	33
ANEXO	58

PRESUPUESTO 2019

DESCRIPCIÓN BOLETÍN 12130-05

REFERENCIA	Ley de Presupuestos del sector público correspondiente al año 2019
INICIATIVA	Mensaje presidencial
ORIGEN	Cámara de Diputados
MINISTERIO	De Hacienda
INGRESO	29 de septiembre de 2018
ARTICULADO	29 artículos ¹

¹ Algunos artículos fueron modificados y otros incorporados durante la tramitación legislativa, como se indica en cada caso mediante nota a pie de página. Además, en un ANEXO, se agregan los artículos 1 y 2, según los reajustes que se hicieron en la tramitación del proyecto.


OPINIÓN EJECUTIVA DE LYD

El proyecto ingresado por el Ejecutivo plantea que el gasto fiscal en 2019 alcanzaría US\$73.493 millones, lo que implica un incremento real de 3,2% con respecto al año 2018.


Al respecto, el escenario fiscal propuesto para el quinquenio 2019-2023 sería coherente con la meta de la autoridad fiscal de reducir el déficit estructural en 0,2% del PIB por año y llegar a -0,8% en 2023. Ello implica un crecimiento moderado del gasto para todo el período, lo cual no se ha observado históricamente desde que hay registros, reflejando una elevada exigencia para el cumplimiento del compromiso. De este modo, con la trayectoria de los ingresos efectivos y del gasto fiscal, la deuda pública debiera tender a estabilizarse en niveles cercanos a los registrados a fines de este año.

Por otro lado, el proyecto de presupuesto 2019 tiene como principales ejes la seguridad; el crecimiento económico y empleo; la salud; los niños y los adultos mayores; educación; clase media protegida; y regiones, todos los cuales se definieron de acuerdo al programa de gobierno.

En este sentido, el presupuesto para el 2019 es responsable, pues se hace cargo de las prioridades programáticas del gobierno y de la ciudadanía, y procura reducir el déficit fiscal.

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que durante la tramitación legislativa en la Comisión Mixta, surgieron varios puntos conflictivos en relación a ciertos recortes presupuestarios o distribución de los recursos en algunas partidas. Finalmente, ellos fueron resueltos en una propuesta del Ejecutivo consensuada con los parlamentarios, lo que permitió el despacho total del proyecto por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA LEY DE PRESUPUESTOS

Respecto de las bases constitucionales y legales sobre la formulación del presupuesto, su estructura y tramitación, así como las atribuciones del Congreso Nacional y del Presidente de la República, la naturaleza de las glosas y la modalidad especial de publicación del Presupuesto Anual de la Nación, véase la Reseña Legislativa 1211 de octubre de 2015, relativa al Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2016 

IV. COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL

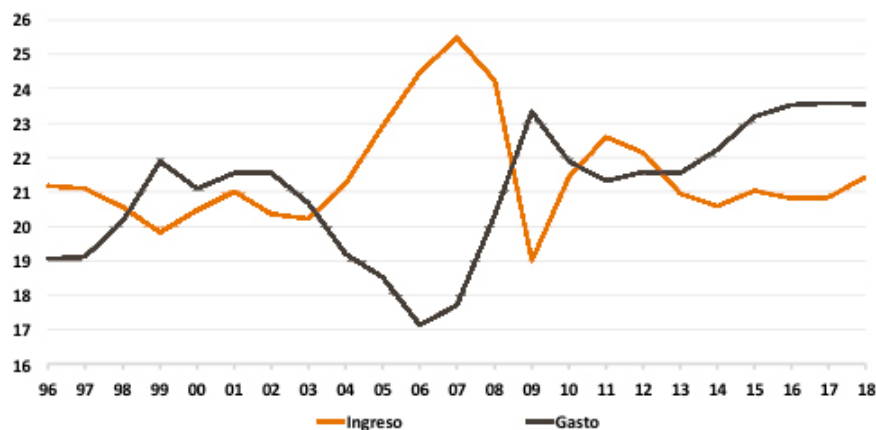
1. CONTEXTO FISCAL

PUNTO DE PARTIDA

Dado el elevado crecimiento del gasto público de los últimos años, este ha llegado a ubicarse en torno a 24% del PIB, su nivel más alto desde que existe registro (gráfico 1). Esto en un contexto de ingresos que se mantienen estancados en torno a 21% del PIB, a pesar de la implementación desde el 2014 de una reforma tributaria que se estimaba recaudaría 3% del PIB y que no iba a dañar de ninguna forma el crecimiento del país.

Gráfico 1: Ingreso y gasto fiscal

(porcentaje del PIB)

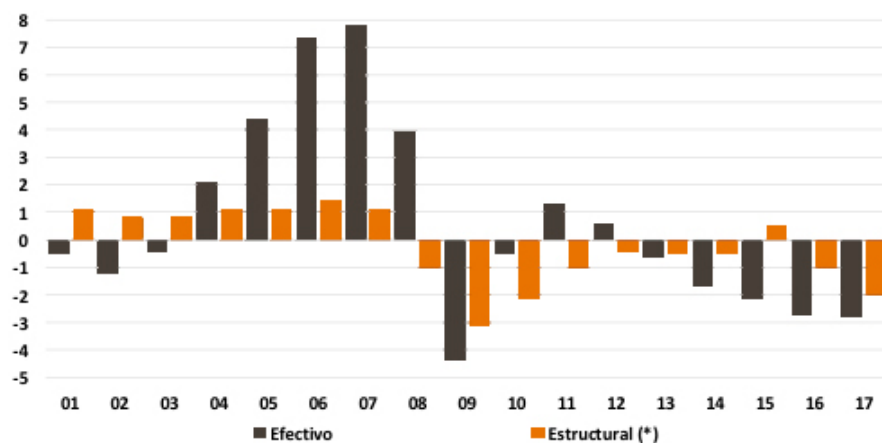


Fuentes: Banco Central de Chile y Dipres.

El resultado directo de este incremento del gasto no financiado, es el incremento sostenido tanto del déficit efectivo como del estructural (llegando a -2,8 y -2,0% en 2017, respectivamente), y de la deuda tanto bruta y como neta (alcanzando a 23,5 y 4,4% a fines del 2017, respectivamente) (gráficos 2 y 3).

La preocupación generada por el incremento de los déficits y la deuda aumenta si consideramos que en Chile la política fiscal se ejecuta en un marco de regla de balance estructural y de Consejo Fiscal Asesor, ambos elementos coherentes con las recomendaciones internacionales para garantizar una política fiscal responsable.

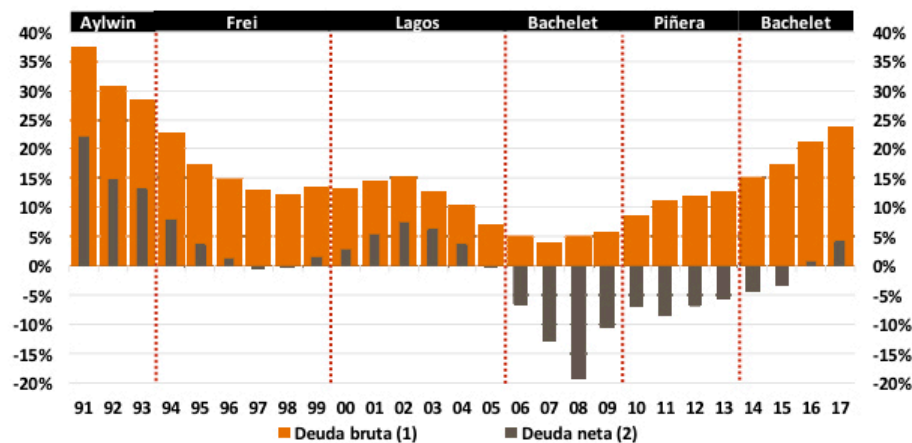
Gráfico 2: Balance Fiscal
(porcentaje del PIB)



(*) Estimado en base a los parámetros originales de cada año.

Fuentes: Banco Central de Chile y Dipres.

Gráfico 3: Deuda pública
(porcentaje del PIB)



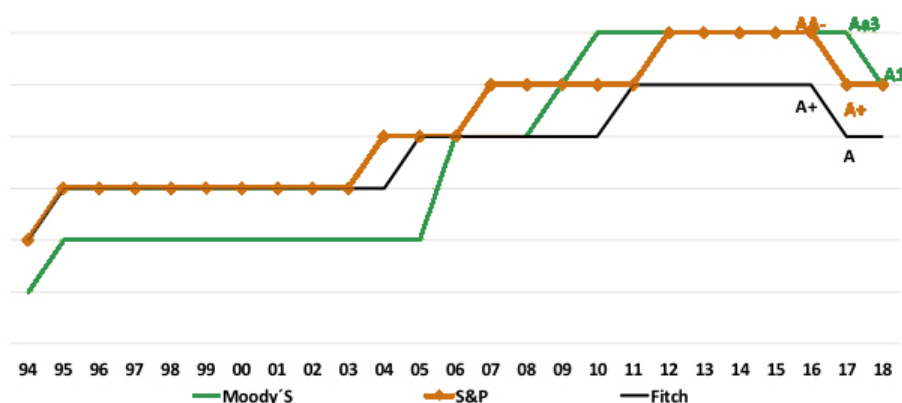
(1) Corresponde a los pasivos financieros.

(2) Corresponde a los activos financieros descontados los pasivos financieros.

Fuentes: Banco Central de Chile y Dipres.

Es en este contexto de deterioro progresivo de la solidez fiscal que las principales clasificadoras de riesgo internacional redujeron la clasificación de la deuda pública chilena en el último tiempo, aduciendo como principal causa el manejo de las cuentas fiscales y la dificultad que presenta la autoridad política para no ceder a las crecientes demandas sociales (gráfico 4).

**Gráfico 4: Clasificación deuda pública de largo plazo
(porcentaje del PIB)**



Fuente: Elaboración propia en base a información disponible.

La consecuencia de una rebaja crediticia se relaciona con el acceso a financiamiento externo que tiene tanto el gobierno como el sector privado. En la medida que el gobierno sea percibido por los agentes internacionales como más riesgoso, el costo de financiamiento le aumenta tanto para el sector público como para el privado. Por otro lado, una mejora en la nota crediticia se gatilla por el cumplimiento sostenido de la responsabilidad fiscal, para lo cual se requiere de un compromiso transversal que va más allá de una sola administración.

ELEMENTOS A CONSIDERAR

La capacidad que tiene el Estado para afectar los gastos es distinta a la que tiene para afectar los ingresos.

Los ingresos no dependen solamente de las decisiones de la autoridad fiscal. Entre los principales elementos que los afectan están: i) decisiones de políticas por parte de la autoridad fiscal; ii) decisiones de los privados; iii) ciclo económico interno y externo. Dado esto, se hace

necesario separar la parte volátil de los ingresos (provenientes del ciclo) de aquella parte que es más permanente (estructural). El componente cíclico del ingreso debe ser ahorrado cuando el ciclo es positivo y gastado (desahorrado) cuando el ciclo es negativo.

Entre los ingresos, el componente que más aporta a la recaudación es el impuesto no cobre (79% de los ingresos en 2017) (gráfico 5). Dentro de estos últimos, los más relevantes son el IVA (49% de los ingresos tributarios en 2017) y la renta no cobre (38%) (gráfico 6). Esto implica que frente a cualquier necesidad de financiamiento relevante las probables partidas a aumentar son el IVA y el impuesto a la renta.

Gráfico 5:
Ingresos del Gobierno Central Total
(porcentaje del PIB)

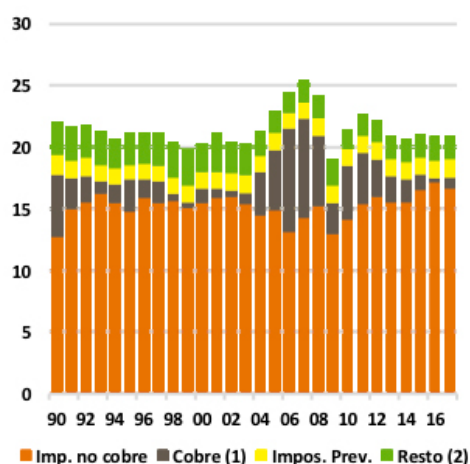
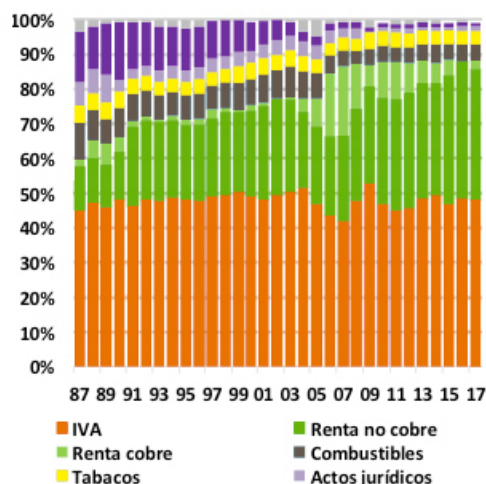


Gráfico 6:
Impuestos del Gobierno Central Total
(porcentaje del total)



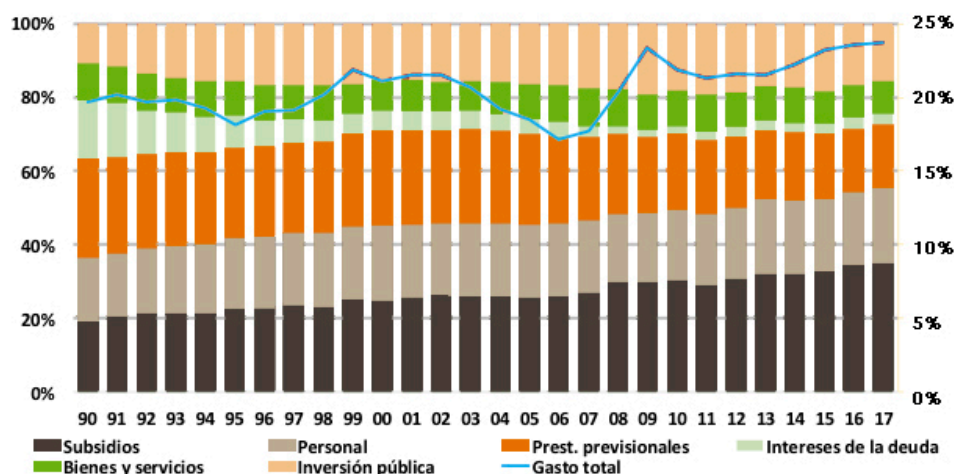
(1) Incluye ingresos provenientes de CODELCO y de las mineras privadas por primera categoría. (2) Incluye ingresos por donaciones, rentas de propiedad, ingresos de operación, otros y venta de activos físicos. Fuente: Elaboración propia en base a información disponible.

Por el lado de los gastos, hay que considerar que aproximadamente el 80% de ellos no se puede alterar fácilmente en caso que se requiera de algún ajuste relevante, quedando como candidato principalmente la inversión pública², tal como se ha observado históricamente (gráfico 7).

² Considera tanto la línea de inversión como de transferencias de capital.

Gráfico 7: Gastos del Gobierno Central Total

(porcentaje del total)



Fuentes Banco Central de Chile y Dipres.

INSTITUCIONALIDAD FISCAL ÓPTIMA

La evidencia empírica muestra que en aquellos países que experimentan recurrentes ciclos económicos producto de la volatilidad de los precios de sus principales materias primas o que presentan instituciones políticas débiles, la implementación de reglas fiscales es necesario para fomentar el manejo responsable de la política fiscal.

Un manejo deficiente de la política fiscal se traduce normalmente en que esta tiende a ser procíclica, esto es, acentúa más aún el ciclo económico con sus decisiones de ingreso y/o gastos, reduciendo finalmente el bienestar de las personas. Este comportamiento se explica, en parte, porque estos gobiernos tienden a considerar los booms económicos como permanentes, comprometiendo mayores gastos financiados con los ingresos adicionales, mientras que las recesiones son consideradas como transitorias, acudiendo a los ahorros para financiar el elevado gasto. De esta forma: i) el gasto aumenta sostenidamente y más allá de la capacidad de los ingresos de largo plazo; ii) el déficit efectivo aumenta en el tiempo; iii) la deuda se incrementa sostenidamente generando, problemas de acceso al financiamiento externo; y, iv) finalmente, la solución viene por el ajuste drástico del gasto

Las reglas fiscales recomendadas pueden tomar variadas formas, pero normalmente relacionan la trayectoria de los gastos a la de los ingresos de largo plazo. Chile implementó una regla fiscal en el 2001, pero desde su implementación ha experimentado innumerables ajustes tanto

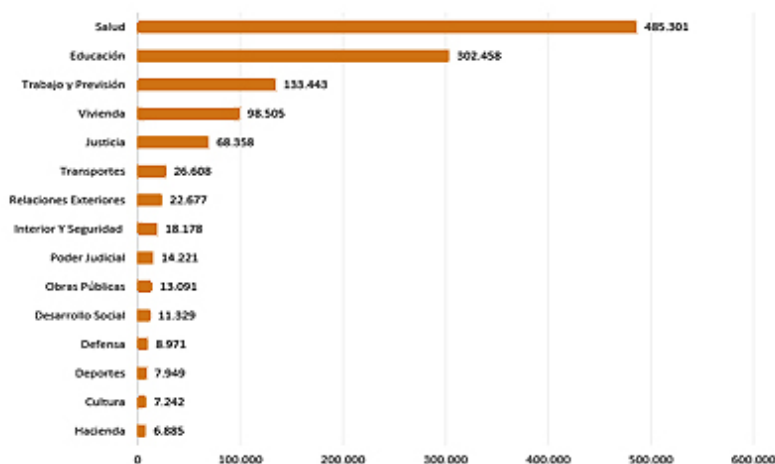
en su metodología como en su objetivo, lo que ha generado que no haya consenso en los analistas nacionales respecto de su verdadero cumplimiento con posterioridad al 2008, duda que se ha traspasado a los analistas internacionales.

En este sentido, la Ley de Presupuestos del 2019 considera un crecimiento del gasto de 3,2% real. Este crecimiento estaría en línea con el compromiso de la misma autoridad fiscal de reducir el déficit estructural en -0,2% por año en un contexto de crecimiento reducido de los ingresos estructurales.

LINEAMIENTOS GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019

Se trata de un presupuesto responsable con un marcado sello social y con miras a consolidar la reactivación económica y la inversión, tras la fuerte caída de ésta en los últimos años. En efecto, si uno revisa cada una de las partidas, uno puede percatarse que efectivamente el presupuesto del 2019 propuesto por el Ejecutivo está orientado y concentrado en cumplir con los compromisos adquiridos en el programa de gobierno y en reducir el déficit fiscal. En efecto, los mayores incrementos en cuanto al monto de gasto presupuestario (en millones de pesos) corresponden a los Ministerios de Salud, Educación, Trabajo y Previsión Social, Justicia y Vivienda (gráfico 8).

Gráfico 8: Incremento del Gasto por Ministerio en Relación a Ley Vigente 2018
(Millones de \$ 2019)



* Se reportan los principales incrementos

Fuente: Presentación de Informe de Finanzas Públicas. Gobierno de Chile/Dirección de Presupuestos

En Salud, el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno a discusión aumenta en un 5,9% respecto del año anterior, siendo uno de los impulsores de este incremento el financiamiento destinado a la implementación del compromiso del gobierno del Hospital Digital. Por otro lado, con el aumento de recursos se espera modernizar los hospitales, reducir las listas de espera y bajar los precios de los medicamentos, entre otras cosas.

Por su parte, el gasto en Educación que se refleja en el proyecto de presupuesto presentado al Congreso Nacional representa un 22,7% del gasto público total del próximo año, y entre las iniciativas contenidas en el programa de gobierno, destaca el aumento en el gasto para financiar los Liceos Bicentenario de Excelencia Técnico Profesional (+ \$4,9 mil millones). Al mismo tiempo, se aumenta en un 6,3% el gasto dirigido a la Subsecretaría de Educación Parvularia, lo que equivale a \$20 mil millones más, que se explica fundamentalmente por el aumento de recursos al Convenio Integra y a la creación de una nueva asignación de Apoyo a la Educación Parvularia.

En lo que respecta al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se definen como ejes principales la promoción de políticas públicas orientadas a crear empleos de calidad, lo que tiene un impacto directo en el crecimiento. Asimismo, destacan la promoción de un mercado laboral inclusivo, la modernización del Sistema Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y de la Dirección del Trabajo, y la reforma al sistema previsional, todos compromisos adquiridos en el Programa.

En Justicia, gran aumento de este proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno está destinado a iniciativas de inversión en cárceles, implementación de la reforma procesal penal y ejecución del programa de modernización del Registro Civil. También hay un importante incremento de recursos destinados a inversiones en centros de menores (+ 810,2%), lo que da cuenta del compromiso asumido por el Gobierno con la infancia. Dicho compromiso queda además reflejado en que el total de presupuesto asignado a los programas de infancia (considerando los que lleva el Ministerio de Justicia, de Salud y de Desarrollo Social), aumenta en un 143,6% respecto al año anterior, esto es, en aproximadamente \$100 mil millones.

En Vivienda, el proyecto de ley presentado asigna a Inversión Habitacional un total de \$1.491.034 millones (+11,5% respecto del año anterior). Destaca también el aumento a los fondos asignados a subsidios (12,4% promedio) y el inicio de proyectos de infraestructura sanitaria.

Asimismo, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el programa de gobierno se ve reflejado en el aumento de las asignaciones en seguridad pública, como la modernización de policías y fortalecimiento de sistemas de inteligencia; en los recursos destinados a inversión en regiones; en el Plan Impulso Araucanía; y en el diseño e implementación de Red Clase Media Protegida, entre otros.

Por último, además de tratarse de un presupuesto responsable y en línea con los compromisos adquiridos en el programa de gobierno, otro aspecto que vale la pena destacar es que el 65%

de los programas nuevos y reformulados financiados en el proyecto de ley de presupuestos 2019 cuentan con una recomendación favorable. Este aspecto es de suma importancia, puesto que las Evaluaciones de Programas Gubernamentales realizadas tanto por el Ministerio de Desarrollo Social como por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) son un elemento absolutamente necesario para un buen proceso presupuestario, debiendo ser consideradas para una asignación más eficiente de los recursos³ ■■■

3 Véase en TEMAS PÚBLICOS N° 1372-1; 12 de octubre de 2018.

V. ALGUNOS ASPECTOS ESPECÍFICOS

Durante la tramitación legislativa del presupuesto en la Comisión Mixta, surgieron varios puntos conflictivos en relación a ciertos recortes presupuestarios o a la forma en que se distribuyen los recursos en algunas partidas. Finalmente, y tal como se explicará, ellos fueron resueltos mediante una propuesta del Ejecutivo consensuada con los parlamentarios, lo que permitió el despacho total del proyecto de la Comisión Mixta.

TESORO PÚBLICO: PROVISIÓN DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO

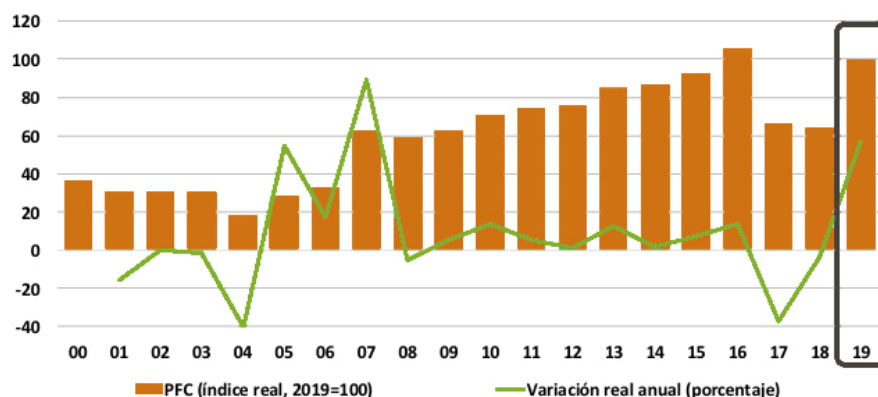
En la discusión legislativa en torno a la Ley de Presupuestos del 2019, algunos parlamentarios de oposición presentaron una indicación,- la cual fue aprobada en la Comisión Mixta,- para reasignar fondos desde el ítem Provisión de Financiamiento Compartido (PFC) de la partida del Tesoro Público -argumentando que esta línea presenta un excesivo e injustificado incremento de 57%-, con miras a conseguir dineros asociados a Ciencia e Innovación, Educación Superior Pública, Fondos a Regiones. Esta indicación se aprobó por un estrecho margen. Por parte del Ejecutivo, se advirtió que dichos fondos están previstos para provisionar leyes en trámite, reajuste público, atender a emergencias nacionales, entre otros.

Hay que destacar que estos fondos propuestos (\$1.400 billones) se destinarían, principalmente, a: i) financiar las distintas iniciativas comprometidas por este gobierno —cuyo programa fue elegido por una amplia mayoría—, de las cuales ya hay 64 proyectos de ley en trámite legislativo; y ii) el reajuste del sector público que se negocia una vez finalizado este proceso presupuestario, y que, observando informes financieros históricos de los proyectos de ley de reajustes del sector público, claramente los recursos fiscales involucrados representan un porcentaje relevante de esta línea.

Por otro lado, es cierto que estos fondos presentan un elevado crecimiento respecto del 2018, pero esto se explica por la importante caída que experimentan en el bienio 2017-2018 (-40%) (gráfico 9). Con todo, el actual monto presupuestado para 2019 (\$ 1.400 billones) es incluso inferior en términos reales al presupuestado en 2016 (-5,3%).

Gráfico 9:

Tesoro Público: Provisión para Financiamientos Comprometidos



Fuente: Elaboración propia sobre datos de la DIPRES.

No obstante lo anterior, finalmente y como se verá a continuación, con la propuesta del Ejecutivo para reasignar recursos desde el Tesoro Público por unos \$97 mil millones para educación superior, gobiernos regionales, Conicyt, programas de convivencia escolar, para la educación no sexista y para prevención de la violencia, entre otros, se logró culminar el despacho del proyecto de ley de Presupuestos 2019 desde la Comisión Especial Mixta.

GOBIERNOS REGIONALES

Es importante el financiamiento de los gobiernos regionales dado que en dos años más se elegirá por primera vez en nuestro país el recientemente creado cargo de gobernador regional, cabeza de los gobiernos regionales. Si hoy existe una fuerte discusión y crítica en el parlamento respecto de cuántos recursos se transfieren a cada una de las regiones y cómo se hace; ello es sólo la antesala de lo que ocurrirá cuando sean autoridades electas las que encabezen los gobiernos regionales.

Por esto, previo a la elección de autoridades regionales, se deben revisar los actuales canales por medio de los cuales se transfieren recursos a las regiones, asegurando que ello sea sobre la base de criterios conocidos, objetivos y verificables. Hoy por hoy existen amplios espacios para una distribución discrecional de recursos por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) del Ministerio del Interior, lo cual es inaceptable e incompatible con un escenario de autoridades regionales electas.

La Ley de Presupuestos entrega recursos a los gobiernos regionales tanto para financiar su funcionamiento como para su programa de inversión. Para el próximo año, el proyecto de presupuesto del Ejecutivo es de continuidad, y en su conjunto, los gobiernos regionales dispondrán de \$75 mil millones para su funcionamiento y se les fijó una dotación máxima de 1.866 personas. Hoy no se conocen parámetros objetivos sobre los cuales se determinan estos valores, lo cual es necesario ya que una vez que se cuente con autoridades regionales electas, las regiones se confrontarán en forma permanente con el gobierno central para obtener mayores recursos, eventualmente acusándolo de politizar los criterios de asignación.

En cuanto a los recursos para inversión, para el próximo año el proyecto contempla que los gobiernos regionales contarán con \$ 1.275 mil millones. De estos, \$ 1.072 mil millones (84% del total) son distribuidos a regiones en la propia Ley de Presupuestos, lo que se conoce como Inversión Regional Distribuida. Los restantes \$203 mil millones son asignados a regiones durante el año. En este punto surge el primer cuestionamiento en cuanto a la discrecionalidad que tiene la SUBDERE en la distribución regional de estos recursos ya que no se conocen criterios objetivos para su asignación.

Tras los incesantes requerimientos por parte de parlamentarios de aumentar los recursos para inversión en regiones, el Ejecutivo formuló una propuesta de incremento en Inversión Regional por \$ 10.000 millones financiado con recursos del Tesoro Público (Provisión Financiamiento Comprometido o PFC), que fue aprobada por la Comisión Mixta. También se aprobó dar mayor apoyo profesional a la SUBDERE para Fortalecimiento Regional financiado con acciones concurrentes (Gastos Corrientes).

Al respecto, se debe avanzar para que todos los recursos a regiones se distribuyan en la Ley de Presupuestos y sobre la base de parámetros objetivos, conocidos y verificables. Ello no sucede en la actualidad y, por ende, se estima que la autoridad central tiene un importante grado de injerencia en los mismos.

Por último, cabe preguntarse qué cambios se están haciendo o bien se harán desde un punto de vista presupuestario, con miras a la elección de Gobernadores Regionales en octubre del 2021. Al menos se debe avanzar en los siguientes tres ámbitos:

1. Fortalecimiento de la capacidad de gestión de los gobiernos regionales. En esta línea se esperaba desde un punto de vista presupuestario un mayor énfasis en programas y proyectos tendientes a mejorar su capacidad de gestión en regiones.
2. Revisión a los distintos programas y fondos que hoy transfieren recursos desde la SUBDERE a los gobiernos regionales con el fin de contar con una mayor transparencia y menor discrecionalidad en la entrega de recursos
3. Es importante que se defina una mayor transparencia en la gestión de los recursos y compromisos financieros de los gobiernos regionales, y se introduzcan normas de

responsabilidad fiscal. Es bien sabido que los gobiernos regionales cuentan con una importante cartera de arrastre y una aún más abultada cartera de proyectos aprobados por los respectivos Consejos Regionales a la espera de ser financiados. Es importante por medio de normas de disciplina y transparencia fiscal conocer el nivel de estos compromisos asumidos.

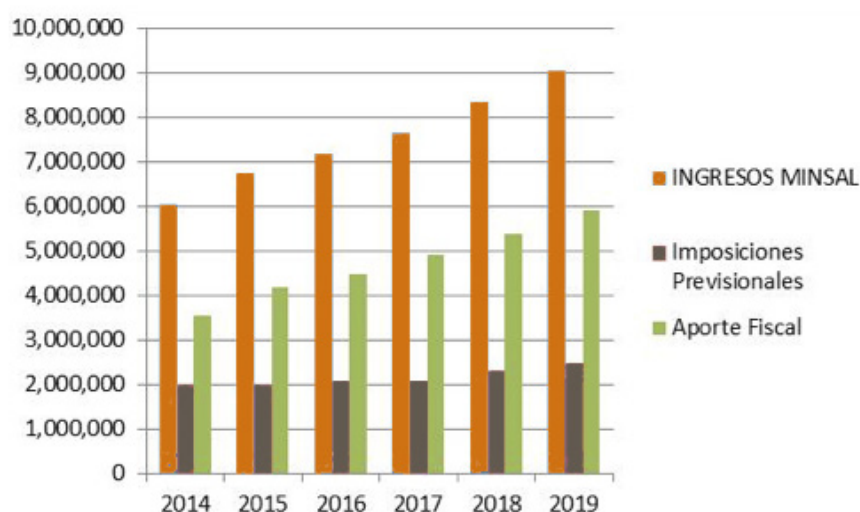
MINISTERIO DE SALUD (MINSAL)

El Proyecto de Ley de Presupuestos 2019 presentado propone para el MINSAL un Gasto de Estado de Operaciones que crece en 5,9% para alcanzar un monto de \$8.654.804 millones (US\$ 13.315 millones) en el 2019. El Ingreso Total del MINSAL, que es igual al Gasto Total Neto de Transferencias Consolidables de la Partida, alcanza a los de \$9.059.970 millones (US\$ 13.938 millones), lo que significa un aumento real de 8,6% (equivalente a un incremento de \$719.875 millones de pesos del 2019 o US\$ 1.107 millones).

Del total de Ingresos del MINSAL para el 2019, el aporte fiscal representa un 66% y las imposiciones previsionales un 27%, mientras que las otras categorías representan 3% o menos. El gráfico 10 muestra que, en general, el aumento en los Ingresos del MINSAL sigue la tendencia de años pasados.

Gráfico 10: Serie histórica de Ingresos MINSAL

(en \$ millones de 2019)

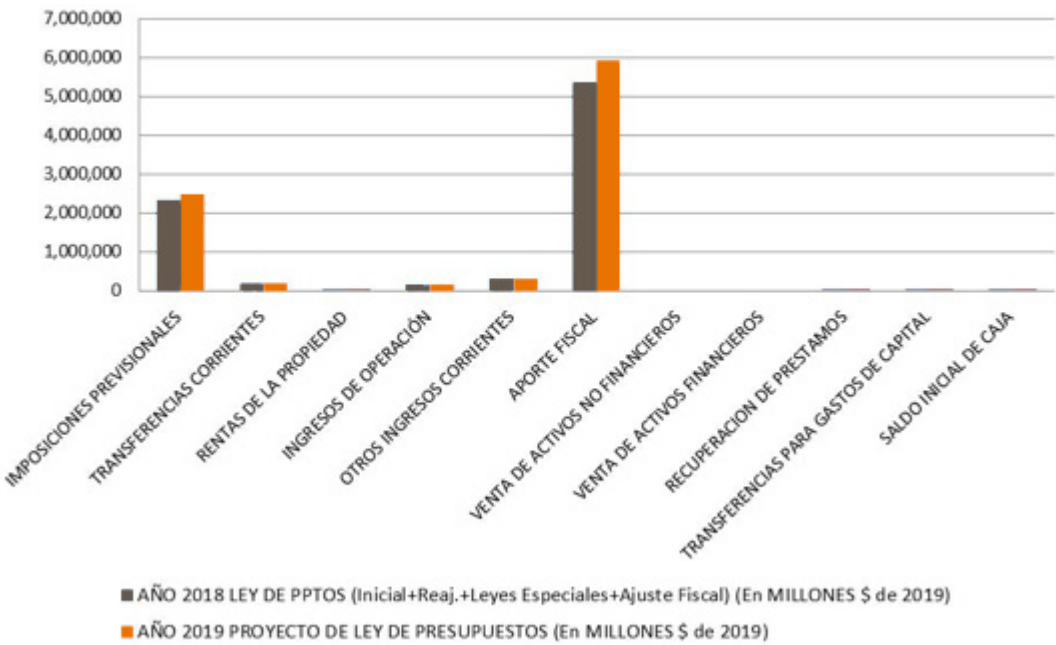


Fuente: LyD en base a DIPRES.

El gráfico 11 muestra las diferencias de ingreso presupuestario respecto al 2018:

- El aporte fiscal aumenta en \$580.919 millones (10,9%), alcanzado para 2019 un monto total de \$5.926.905 millones o US\$ 9.118 millones (US\$ 894 millones adicionales a los entregados en 2018).
- Las imposiciones previsionales presentan un aumento importante de \$147.366 millones (6,3%), alcanzado para 2019 un monto total de \$2.473.798 millones (US\$3.806 millones), US\$ 227 millones adicionales a 2018. Este aumento del 6.3% es superior al incremento porcentual promedio de 2015-2018 de 4,07%.

Gráfico 11: Ingresos MINSAL por categoría, 2018 vs 2019
(en \$ millones de 2019)

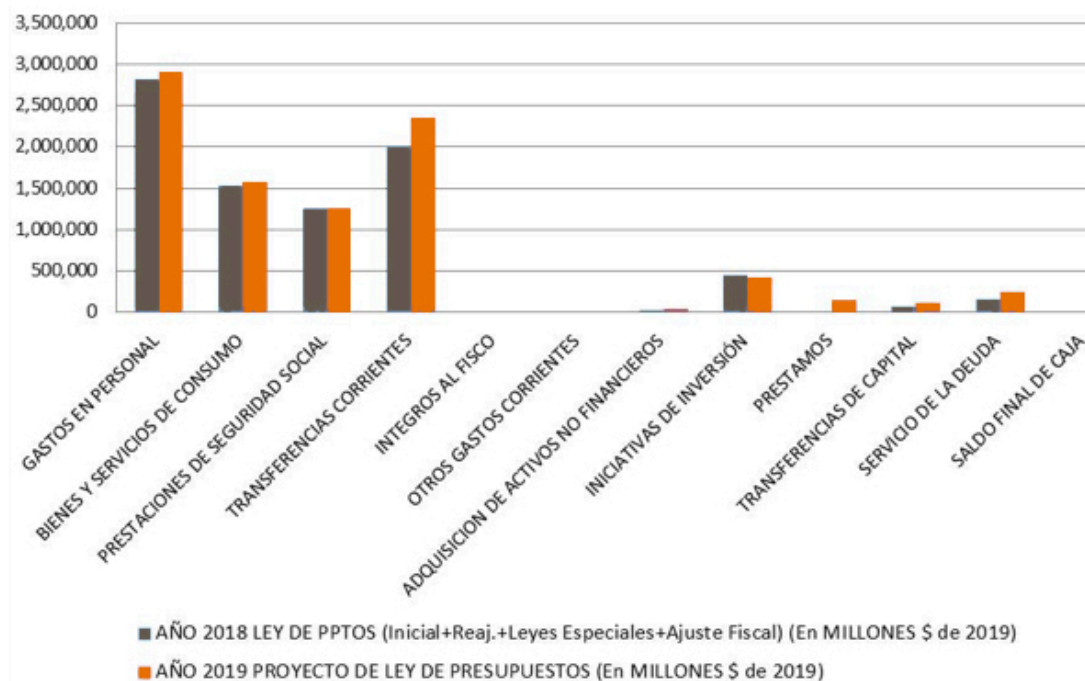


Fuente: LyD en base a DIPRES.

Del total de Gastos del MINSAL para el 2019, el gasto en personal representa un 32%, transferencias corrientes un 26%, bienes y servicios de consumo un 17%, y prestaciones de seguridad social un 14%. Cada una de las otras categorías representa 5% o menos (gráfico 12).

Gráfico 12: Gastos MINSAL por categoría, 2018 vs 2019

(en \$ millones de 2019)



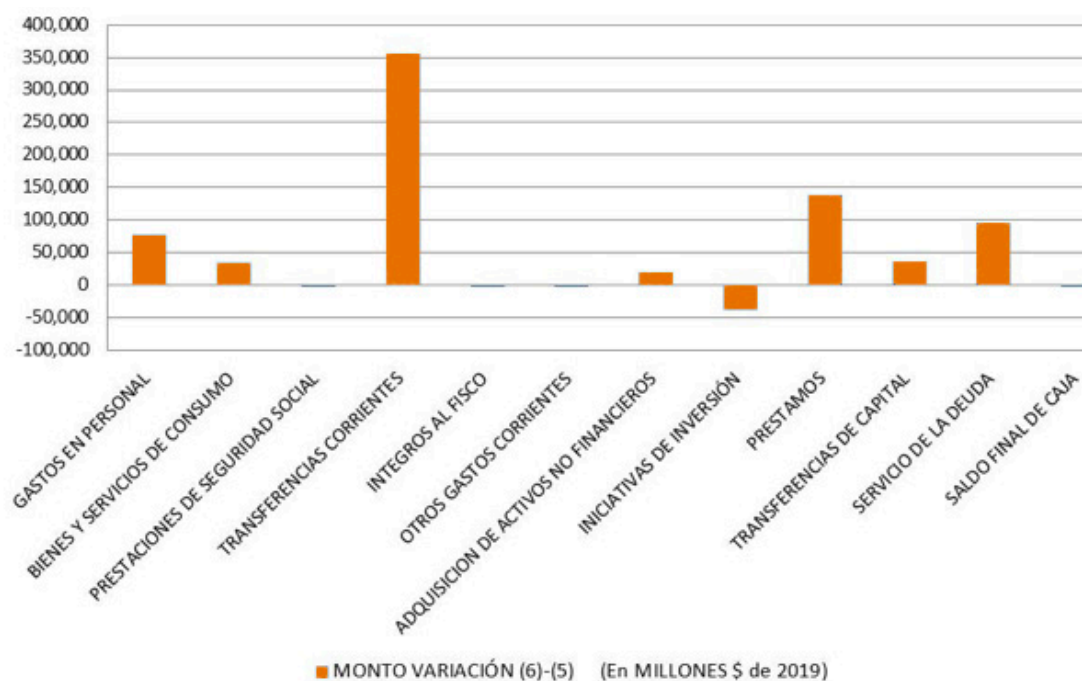
Fuente: LyD en base a DIPRES.

Los siguientes son los ítems cuyas variaciones tienen la mayor incidencia en la variación total de gastos del MINSAL (gráfico 13):

- Transferencias corrientes para el 2019 alcanzan un monto de \$2.353.970 millones (US\$ 3.621 millones), aumentando en 17,8%. Este aumento equivale a \$335.696 millones (US\$ 547 millones) con respecto al 2018.
- Préstamos: aumentan un 1171.4%, es decir aumenta en \$139.016 millones (US\$ 214 millones) con respecto al 2018.
- Servicio de la deuda: aumenta en \$95.561 millones (60.2%)
- Gastos en personal: aumenta en \$76.553 millones (2.7%). Este incremento, tanto en monto como en porcentaje, es mucho menor al de años anteriores (8,8% en 2015; 8,6% en 2016; 7,7% en 2017; y 11,4% en 2018).

Gráfico 13: Variaciones en Gastos de MINSAL

(en \$ millones de 2019)



Fuente: LyU en base a DIPIRES.

Sin perjuicio de que la partida fue aprobada por unanimidad en la Subcomisión respectiva, durante la Comisión Mixta, se rechazaron las transferencias corrientes al programa de atención primaria, en particular, el ítem 02 del subtítulo 24. Esto debido a que este año sólo aumenta en \$187 las asignaciones por persona, es decir, en un 3%, en circunstancias que en los años anteriores habría aumentado más. Con el nuevo reajuste quedaría en \$6.305 per cápita, lo que parlamentarios consideran insuficiente.

Dentro de las propuestas del Ejecutivo que surgieron a raíz de los cuestionamientos a algunos programas de esta partida, está la de reasignar \$ 6.500 millones de recursos dentro del MINSAL, desglosado de la siguiente manera: a. PPV a PPI (\$ 2.500 millones), b. Camas de Corta Estadía (\$ 2.000 millones), c. Rehabilitación por Drogas y Psicotrópicos (\$ 1.000 millones); y d recursos para Pañales de Adulto Mayor (\$ 1.000 millones). Asimismo, se incorporó una glosa para que PPV y Sobregasto se efectúe vía Chile Compras.

Por último, es necesario reconocer y transparentar aquellos gastos relacionados con la sobre ejecución en salud, así como también avanzar en la contención de estos gastos.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

El presupuesto del 2019 para el Ministerio de Educación (MINEDUC) propuesto por el Gobierno al Congreso Nacional será de \$11.522.485 millones, que representan un aumento de 2,7% respecto al presupuesto ajustado del año anterior. En términos de gasto, es decir, excluyendo reintegros al fisco y préstamos (como el Crédito con Aval de Estado), para el año 2019 éste alcanzará los \$10.858.360 millones, equivalentes a 2,9% más que el año anterior. De esta forma, el gasto del MINEDUC representará un 22,7% del gasto público total del próximo año.

Destacan la implementación de las principales leyes elaboradas por el gobierno anterior: un 74,4% del mayor gasto para 2019 se explica por los avances en: la Ley de Carrera Docente; Ley de Inclusión; Gratuidad de la Educación Superior; Ley de Universidades Estatales; y por la implementación de los nuevos servicios locales de educación que se harán cargo de la educación escolar pública (Tabla N°1).

Tabla N° 1

(Millones de \$ 2019)

Aumento en el Gasto	\$ 467.815	
1. Implementación de leyes Gob. Anterior	\$ 347.867	(74,4%)
1.1 Carrera Docente	\$ 219.704	
1.2 Ley de Inclusión	\$ 25.876	
1.3 Nueva Educación Pública	\$ 5.429	
1.4 Gratuidad Ed.Superior	\$ 91.411	
1.5 Ley de Universidades Estatales	\$5.446	
2. Otras iniciativas	\$ 119.948	(25,6%)
Reducciones en el Gasto	- \$ 148.135	
Aumento Neto del Gasto*	\$ 319.680	

*Excluye gastos "bajo la línea".

Fuente: Elaboración propia a partir de Líneas Programáticas, DIPRES.

Por su parte, entre las iniciativas contenidas en el programa de gobierno, destaca el aumento en el gasto para financiar los Liceos Bicentenario de Excelencia Técnico Profesional (+ \$4,9 mil millones).

En la partida correspondiente al Ministerio de Educación, unos de los debates más conflictivos que se suscitaron en la discusión, tanto en la Subcomisión específica como en la Comisión Mixta, corresponden a la disminución de los recursos que se les destinaría en el año 2019 a las Junji y a la insuficiencia de recursos destinados al financiamiento de las universidades estatales.

a) Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji):

La principal discrepancia entre el gobierno y la oposición se produjo debido a la reducción de los recursos para la construcción e infraestructura de jardines infantiles y salas cuna. No obstante, esta reducción se explica por el avance en la construcción de jardines infantiles comprometida por el gobierno anterior (los llamados “jardines meta”), la cual se retrasó considerablemente y, además, se sub ejecutó año tras año. Muestra de ello es que en el caso de los recursos para Proyectos (subt.31), mientras entre 2015 y 2017 se aprobó inicialmente un promedio de \$187 billones al año, la ejecución anual estuvo en torno a los \$77 billones, bastante cerca de los \$74 billones que el gobierno proyectó para el próximo año.

Asimismo, en el caso de las Transferencias de Capital a Municipios (subt.33), se estableció una disminución de \$4 mil millones (-84%), que generó el rechazo de los parlamentarios de oposición. No obstante, aquí ocurre algo similar al caso de los jardines meta: en 2017 se ejecutó apenas el 24% del presupuesto inicial aprobado y en 2018, la ejecución al tercer trimestre fue de apenas un 9,4% del presupuesto aprobado. De esta forma, si suponemos que este mismo ritmo se mantuviera hasta diciembre, entonces el presupuesto de 2019 estará en línea (levemente por encima de) lo efectivamente ejecutado este año.

De esta forma, si bien el presupuesto para la construcción e infraestructura de jardines infantiles en 2019 está por debajo de lo aprobado en 2018, lo cierto es que está en línea con los dineros efectivamente ejecutados en los años anteriores. En consecuencia, más que una reducción de recursos, se trata de un ajuste producto del avance en un programa específico (los jardines meta), y de una proyección realista en función de lo que el Estado ha sido realmente capaz de ejecutar en los años previos, independiente de las ambiciosas metas que la administración anterior se propuso en un comienzo y que debió ir reduciendo conforme se enfrentó con la realidad.

Sin perjuicio de lo anterior, y con el objeto de llegar a acuerdos, el Ejecutivo concedió la incorporación de \$1.100 millones para estudios para proyectos JUNJI financiado con recursos del Tesoro Público (PFC).

b) Educación Superior:

En el caso de la Educación Superior, también hubo un desacuerdo entre el gobierno y la oposición, quienes exigieron un aumento en el presupuesto para las universidades estatales.

Así, como una forma de presionar al Ejecutivo, aprobaron una indicación que reduce los recursos a los cuales pueden optar las instituciones privadas (fondos de desarrollo institucional).

Al respecto, es importante de nuevo mirar las cifras en perspectiva. En la Tabla N°2 se muestra el detalle de los recursos que el presupuesto ha dispuesto para las universidades estatales. Aquí se constata que la reducción de los recursos para las universidades estatales vía financiamiento institucional es de apenas -0,5%. E incluso, si es que a esto se suman los recursos dirigidos al financiamiento de Bonos de Incentivo al Retiro para Personal Académico y no Académico (leyes 20.996 y 21.043), encontramos que en realidad los recursos reservados a las universidades estatales experimentan un incremento de 2,8% respecto al año 2018.

Tabla N° 2: Financiamiento Instituciones para Universidades Estatales
(millones de \$ de 2019)

	2018	2019	Dif	Dif %
Aporte Fiscal Directo	142.719	141.394	-1.325	-0,9%
Aporte Institucional U	62.906	62.906	0	0,0%
Plan de Fortalecimiento Universidades Estatales	13.314	18.760	5.446	40,9%
Fondo Desarrollo Institucional (FDI)	8.320	5.107	-3.214	-38,6%
Apoyo Innovación Educación Superior	3.969	1.236	-2.733	-68,9%
Educación Superior Regional	5.122	5.718	596	11,6%
Internacionalizaci	1.374	801	-573	-41,7%
Universidad de Chile	10.508	10.457	-51	-0,5%
= Financiamiento Institucional Total	248.233	246.379	-1.854	-0,5%
Bonos de Incentivo al Retiro	11.279	20.331	9.052	80,3%
= TOTAL	259.512	266.710	7.199	2,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la DIPRES. *Se excluyen los recursos para financiar la instalación de nuevos CFT y universidades estatales, por ser excepcionales.

Con todo, el panorama completo es aún más irrefutable: en 2019, el presupuesto reserva a las universidades estatales \$6 de cada \$10 de los que se han dispuesto para el financiamiento

institucional, aun cuando éstas reciben a menos del 16% de la matrícula del sistema de educación superior. Dicho trato preferente, sin embargo, no se condice ni con las preferencias de los estudiantes, que optan mayoritariamente por las instituciones privadas, ni con los indicadores de calidad y aporte a la generación de bienes públicos.

- En cuanto a las preferencias de los estudiantes, el extinguido AFI que se entregaba a las instituciones que matriculaban a los estudiantes con los 27.500 mejores puntajes PSU, daba cuenta de que casi el 70% optaba por una institución privada universitaria o técnico profesional.
- En cuanto a la calidad, la acreditación de las universidades estatales es en promedio muy inferior a la de las privadas del CRUCH (4,2 versus 5,7 años), e incluso hay universidades estatales que se encuentran en un nivel inferior a las que no forman parte del CRUCH.
- Y en lo que dice relación con el aporte a la generación de bienes públicos, las publicaciones científicas World of Science muestran que, entre las 10 primeras universidades chilenas en 2017, sólo 4 son estatales, mientras que la mayoría son privadas.

Todo ello habla de lo desproporcionadas que han sido las críticas de la oposición y de lo poco justificado que es dar prioridad a las universidades estatales, reservándoles recursos sin que deban competir con otras instituciones que incluso realizan una mayor contribución al país en términos de calidad y generación de bienes públicos.

Sin embargo, tras una nueva propuesta del Ejecutivo, la Comisión Mixta determinó asignar para Fortalecimiento de la Educación Superior Pública \$8.000 millones, financiados con \$6.000 millones con reasignación de Subvención de Escolaridad y \$2.000 millones con recursos del Tesoro Público (PFC). Asimismo, respecto de Aporte Institucional Universidades Estatales, se establece el plazo para dictar reglamento y aumenta el porcentaje de anticipo. Asimismo, respecto a la rendición de cuentas, se acuerda incorporar en la glosa una referencia a la resolución que establece la ley N°21.094 en su artículo 56.

c) Otros:

Finalmente, y resolviendo otras materias que fueron debatidas en relación a la Partida de Educación, en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, se acordó lo siguiente:

1. En Programa Convivencia Escolar se incorporan \$ 1.500 millones financiados con recursos del Tesoro Público (PFC).
2. Incremento de \$500 millones en el Programa de Educación Intercultural Bilingüe de MINEDUC.

3. Incremento Programa CONICYT por \$ 2.500 millones financiados con recursos del Tesoro Público (PFC) para programas Reinserción de Investigadores, Explora, Cooperación Internacional y Apoyo Complementario de Investigación.
4. Incorporar recursos por \$ 600 millones para implementar las iniciativas de la Unidad de Equidad de Género (UEG) del MINEDUC sobre Educación No Sexista, financiado con recursos del Tesoro Público (PFC).
5. Respecto de Aporte Institucional para Gratuidad, se incorporará indicación para fijar un plazo para las modificaciones al decreto que fija la metodología de los aranceles regulados, el que sería el 30 de abril. MINEDUC está de acuerdo con el plazo.
6. En Liceos Bicentenario, existe acuerdo en la propuesta que especifica el tipo de establecimiento (Técnico Profesional y polivalente) y elimina “resultados del establecimiento” como criterio. Se acuerda también modificar la palabra “podrá” por “deberá” en lo que refiere a financiamiento de la articulación de estos establecimientos, para su trabajo en red.

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

Durante la discusión presupuestaria, se generaron dos discusiones. La primera, en torno al financiamiento total de esta partida y la segunda en relación a los fondos públicos a instituciones privadas de cultura.

El ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio crece un 4% en su presupuesto total, cifra por encima del 3,2% de crecimiento del presupuesto total del sector público, esto vale la pena destacarlo, ya que este es uno de los ministerios que más crece, pese a la política de ajuste fiscal presentado por el gobierno para el presupuesto nacional 2019.

Este aumento del 4% es motivado principalmente por la instalación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, institución que fue creada en octubre del 2017

En cuanto a la polémica por los recortes de los recursos asignados directamente y sin concursos a determinadas organizaciones que históricamente han recibido fondos desde el presupuesto, cabe hacer algunas precisiones. Para el año 2019 prácticamente no cambian los recursos asignados a la totalidad de las “Instituciones Colaboradoras”, manteniéndose el presupuesto de aproximadamente \$6.800 millones para el 2019. La única diferencia, es que hasta este año 2018, del total de estos recursos más de la mitad se asignaba en forma directa

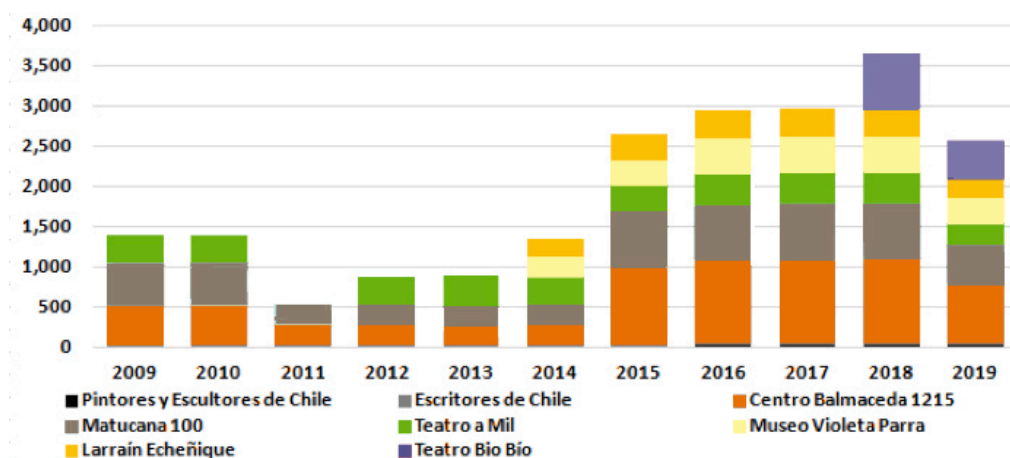
y sin un proceso competitivo mediante, es decir, casi \$3.700 millones a un número determinado de fundaciones.

Lo propuesto originalmente para el año 2019, no implicaba necesariamente una rebaja presupuestaria, solo abre la posibilidad de acceder a financiamiento, a un mayor número de instituciones, por medio de estos fondos concursables.

Parece acertado que las fundaciones que reciben directa y continuamente fondos de la nación, puedan acceder a esos fondos, pero compitiendo en igualdad de condiciones con otras fundaciones. ¿Por qué mantener privilegios solo a algunos?

Lo anterior nos lleva a la siguiente reflexión: Es necesario avanzar hacia políticas que contribuyan a que más instituciones puedan verse beneficiadas con ingresos de la nación, siempre y cuando sean seleccionados con un debido proceso, ya que sería interesante conocer las características que hacen a una u otra institución merecedores de dichos fondos. Por último, es pertinente considerar que el aumento de financiamiento mediante fondos concursables, permitirá dar más espacio a instituciones y fundaciones de regiones, contribuyendo a que la cultura permee a todo el país (gráfico 14).

Gráfico 14: Transferencias Otras Instituciones Colaboradoras
(Millones de pesos 2019)



Fuente:

De 2014 a 2015, el presupuesto para alguna de las instituciones colaboradoras de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, algunas instituciones experimentaron aumentos de hasta 300%, dichas cifras aumentaron durante todo el periodo 2015-2018. En 2019 se produce una baja en el presupuesto para dichas instituciones, para dar espacio a que nuevas instituciones puedan optar a fondos del Estado, a través de fondos concursables, de esta manera, se busca dejar de concentrar dicho presupuesto en 6 instituciones, para permitir que otras manifestaciones de la cultura tengan cabida en el presupuesto nacional.

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, finalmente en la Comisión Mixta se acordó lo siguiente:

1. Incrementar en \$ 1.200 millones para transferencias financiado con recursos del Tesoro Público, de los cuales \$1.080 millones se asignan a recuperar aportes basales a instituciones específicas (asignación directa) y \$ 120 millones aumentan el fondo concursable.
2. A las instituciones que reciben asignación directa se les exigirá una meta de ingresos propios equivalente al 10% del aporte.
3. Glosa para permitir la postulación a fondos concursables para financiamiento de fortalecimiento institucional del GAM, una vez recepcionada la segunda etapa del Museo.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

En la votación de la Segunda Subcomisión Mixta de Presupuestos, esta partida registró 3 votos a favor y 3 abstenciones, por lo que la Subcomisión acordó dejar pendiente esta partida para la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Al respecto, los puntos donde se generó mayor controversia dicen relación con los recursos asignados para el plan de descontaminación de las comunas de Quintero y Puchuncaví de la V Región y, en cuanto al número y recursos asignados a fiscalizadores.

La Comisión Mixta aprobó finalmente la partida de Medio Ambiente, así como una serie de indicaciones propuestas por parlamentarios, particularmente referidas a deberes de información. A modo de ejemplo, se aprobó que la Superintendencia de Medio Ambiente deberá informar trimestralmente a la Comisión Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, el detalle del gasto en personal destinado a labores de fiscalización, precisando: el universo de empresas a fiscalizar, el número de fiscalizadores, el número de fiscalizaciones realizadas por cada funcionario destinado a estos labores, empresas fiscalizadas y sanciones cursadas durante tales períodos. Asimismo, que la Subsecretaría de Medio Ambiente informe trimestralmente sobre los plazos para la dictación

de planes de descontaminación, así como su estado de avance; y también un deber de información específico para la Subsecretaría de Medio Ambiente de informar sobre el estado de avance del plan de descontaminación Ventanas (Quintero y Puchuncaví), sus indicadores, la evaluación del mismo y el cronograma del trabajo del mismo, entre otras indicaciones.

Sin embargo, lo más controversial es que en un principio la Comisión Mixta rechazó el gasto en personal de la Superintendencia de Medio Ambiente, reduciéndose a \$1.000 al considerarlo insuficiente, lo cual fue resuelto como se indica más adelante.

Un análisis de este sub título requiere distinguir entre lo presupuestado y lo efectivamente ejecutado ya que entre 2014 y 2017, el gasto en personal (sub título 21) de la SMA se sobre ejecutó sistemáticamente en 10% promedio respecto de lo presupuestado originalmente. Para 2018, en tanto, la actual autoridad estima una ejecución cercana al 100% de lo presupuestado, quedando con un crecimiento casi nulo (0,8% real) respecto de lo efectivamente ejecutado en 2017, mientras que en el presupuesto en discusión (2019), el crecimiento considerado se ubicaría en torno a 7% real respecto de lo efectivo en 2018. Este crecimiento es coherente con un aumento de 25 de la dotación (+13%). En consecuencia, el crecimiento del gasto en personal es mayor a lo observado en 2018, pero reducido en un contexto histórico más largo.

Al respecto, hay que mencionar que, para una mejor fiscalización en términos medio ambientales, es tan importante incrementar el personal, como complementarlo con mejores sistemas informativos que permitan monitorear y fiscalizar adecuadamente, y como avanzar en mejoras relevantes de la gestión de la fiscalización. En este contexto, y dada la importancia del tema medioambiental que los mismos parlamentarios dicen apoyar, resulta incoherente que, por la emergencia puntual de Quinteros y Puchuncaví, los parlamentarios hayan decidido rebajar al mínimo los recursos asignados para toda fiscalización.

Sin embargo, finalmente este tema fue resuelto en la Comisión Mixta tras una nueva propuesta del Ejecutivo, acordándose una asignación de recursos por \$300 millones para nuevos fiscalizadores, financiado con recursos del Tesoro Público (PFC).

Por otro lado, en la Comisión Mixta se acordó incrementar en \$1.000 millones para crear el Programas de Recuperación Ambiental y Social (PRAS), financiado con recursos del Tesoro Público (PFC); y recursos por \$ 200 millones para estudios o actividades asociadas a la gestión de las Áreas Marinas Protegidas, financiado con recursos del Tesoro Público (PFC), vía Glosa.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

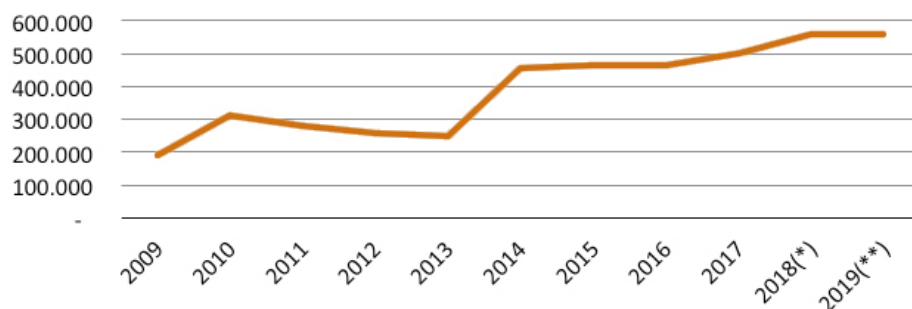
Fue polémico durante la discusión el programa Subsidio Nacional al Transporte Público, que representa cerca del 74% del presupuesto de esta partida.

El programa Subsidio Nacional al Transporte Público se creó luego de la traumática puesta en marcha de Transantiago. Si bien se han entregado argumentos técnicos que apuntan a justificar la existencia de un subsidio al transporte público, cabe recordar que el subsidio a Transantiago se creó para enfrentar una emergencia y evitar el colapso del transporte en Santiago. El monto del subsidio es elevado, y su tendencia ha sido al alza tras sucesivos cambios en la Ley. Por motivos políticos, y sin evaluación previa, se creó también un Fondo Espejo de recursos para regiones por el mismo monto. La crítica desde la oposición apunta a la utilización de estos recursos en regiones. Por ello, más que rechazar la partida, lo que se sugiere es establecer en el protocolo de acuerdo que acompaña a la Ley de Presupuesto una evaluación del destino de estos recursos y a partir de ello introducir modificaciones para el próximo año.

El subsidio a los buses de Transantiago es elevado, pero con las nuevas licitaciones es esperable que cambie la tendencia y disminuya paulatinamente. El gráfico 15 muestra la evolución real del subsidio a Transantiago en millones de pesos de 2018.

Gráfico 15: Subsidios a Transantiago

(MM\$ de 2018)



Fuente: Elaboración propia con datos de Dipres (*) Presupuesto vigente (**) Proyecto de Ley

Al respecto, se requiere mayor transparencia y evaluación de los fondos destinados a regiones, toda vez que, si bien, estos recursos fueron contemplados para mejorar el sistema de transporte público en regiones, se han utilizado para otros fines (construcción de consultorios), lo que de todas maneras, está permitido por la ley.

El año 2013 se hizo una evaluación de los fondos espejo para el período 2010-2012, encargado por la Dipres. Entre las principales recomendaciones del informe se encuentra la falta de información para evaluar el impacto en varios aspectos y que la continuidad del subsidio debe ir acompañada de la realización de estudios que permitan tener un diagnóstico de los sistemas de transporte en las distintas regiones.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que en la última sesión la Comisión Mixta aprobó la nueva propuesta del Ejecutivo, consistente en un incremento de \$6.000 millones el Subsidio al Transporte Público en Regiones (FAR), financiado con recursos del Tesoro Público (PFC), y que dichos recursos podrán usarse, de manera excepcional y previa justificación y aprobación de la DIPRES, para reducir los precios de peajes en zonas conurbanas. Para ello se podrán asignar hasta \$ 1.200 millones para este fin.

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

La Comisión Mixta, en un principio, por empate de votos y 1 abstención, rechazó los fondos destinados al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), por la disminución de los recursos destinados al Programa Más Capaz en un 70,2%. Según el Ejecutivo, esto se debe a la mala evaluación del programa. Sin embargo, parlamentarios de oposición pidieron conocer los fundamentos y estudios que justifiquen este mal desempeño, ya que consideran que es muy relevante para la reinserción laboral de los cesantes.

Al respecto, es de suma importancia que se consideren las Evaluaciones de Programas Gubernamentales, realizadas tanto por el Ministerio de Desarrollo Social como por la Dirección de Presupuestos (DIPRES), para un buen proceso presupuestario, debiendo ser consideradas para una asignación más eficiente de los recursos.

La rebaja en los recursos del Programa Más Capaz no es novedad. Es un programa que ha sido mal evaluado (la última evaluación en Dipres es del año 2015), al cual se le han venido recortando recursos desde presupuestos anteriores.

Este presupuesto plantea, además de continuar reduciendo recursos a este programa ineficiente, otorgarle más recursos al programa de Capacitación de Oficios, en pos de incentivar la capacitación en labores que le permitan al beneficiario del programa poder participar del mercado laboral de manera autónoma luego del uso de este programa, y no ser “cautivo de él” como sucede actualmente en el Más Capaz.

Finalmente, en la última sesión de la Comisión Mixta, el Ejecutivo presentó una indicación para reponer los gastos variables que habían sido disminuidos en SENCE, adecuándose a las cifras

que se presentaron a la Tercera Subcomisión Especial de Presupuestos. Como consecuencia de esta indicación, cabe entender modificados los rubros afectados por la reducción y los rubros superiores de agregación (Tabla N°3).

Tabla N° 3: Reducción de un 42% de los Recursos en los Últimos 2 Años

\$ Constantes					
Programa Más Capaz	110.512.146	104.500.112	60.369.998	34.809.910	8.440.448
Programa de Capacitación en Oficios	19.706.470	19.706.470	17.675.274	17.606.633	27.417.692
Variaciones					
Programa Más Capaz		-5%	-42%	-42%	-76%
Programa de Capacitación en Oficios		0%	-10%	0%	56%

La indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión y, por ende, se dio por aprobado el programa que había sido rechazado previamente por solicitud de votación separada.

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Este año el MINVU ve su presupuesto aumentado en 3,1%, habiendo un menor crecimiento en las soluciones habitacionales, pero uno mayor en mejoras a la vivienda. Hay que tomar en cuenta que cerca del 95% de los fondos de los que dispone este ministerio se gastan en el “arrastre” del año pasado: proyectos antiguos que deben mantener su ejecución, por lo que no es posible realizar muchas innovaciones. Se dio una importante discusión respecto al programa Asentamientos Precarios -ex Campamentos-, donde el presupuesto disminuye en un 0,5%, lo que no se condice con la realidad, ya que los campamentos y familias en éstos han aumentado en el tiempo. El MINVU, a raíz de esto, tiene planeado un catastro para el próximo año, dado que la referencia es del año 2011.

Otra discusión -más intensa- estuvo en el presupuesto de los SERVIU, ya que hubo mucha diferencia en la distribución de fondos para el próximo año. De hecho, se rechazó por la Comisión

Mixta los gastos variables de los SERVIU regionales, debido a que, según parlamentarios de oposición, habría habido disminuciones en algunas regiones en las cuales ha aumentado el número de campamentos. Sin embargo, pese a las críticas, hay que tomar en consideración que los SERVIU a nivel general tienen un incremento de 3% en sus fondos, y los subsidios suben un 12% en el agregado.

Finalmente, en la última sesión, la Comisión Mixta aprobó la propuesta del Ejecutivo del incremento de \$ 48.400 millones para el Subtítulo 32 “Préstamos” para los SERVIU de Tarapacá, Atacama, Coquimbo y Valparaíso, financiados con mayor venta de activos financieros del Tesoro Público. Esto asegura una caída de menos del 12% bruto para todos los SERVIU ■■■

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY EN RESEÑA 1358- VOLUMEN II